



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

CAF 21.148/2014/CA1 “STYLUS SA c/ EN-DGA s/ Dirección General de Aduanas”

En Buenos Aires, a 4 de febrero de 2020, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora en los autos “STYLUS SA c/ EN-DGA s/ Dirección General de Aduanas”, contra la sentencia definitiva de fs. 174/177, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a decidir:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo:

1º) Que, por sentencia de fs. 174/177, la señora jueza de grado rechazó la demanda de STYLUS SA contra la AFIP (DGA), a fin de que se declarara ilegítimo, arbitrario e inconstitucional el decreto 509/07, en cuanto fijó en 26 % el derecho de importación extrazona (DIE) del producto “DVD R”, en lugar del 16 % como sucedía antes de su dictado y, a su vez, se dejara sin efecto la resolución DGA 11/2014, que desestimó su pedido de devolución de U\$S15.776,20, que había abonado por la incorrecta aplicación del DIE respecto de los productos objeto de la destinación de importación 070011C04123005F, oficializada el 2 de agosto de 2007.

Tras efectuar un relato de los antecedentes de hecho y de derecho que dieron origen a la presente causa (v. fs. 174/176), señaló que se había elaborado un proyecto de resolución ministerial de fe de erratas del decreto 509/07, en el que se aclaraba que “... sólo los CD-R tributaban el 26% en concepto de DIE; correspondiendo modificar en la Nomenclatura el nivel arancelario del DIE al 16% aplicable al resto de los demás soportes por el ítem mencionado...” (v. fs. 175/175vta., el subrayado no corresponde al original), así como que esos errores técnicos también se desprendían de memorandos y proyectos ministeriales de la propia demandada (v. fs. 175vta./176).

No obstante ello, puso de relieve que la llamada (30), por la que se recomendaba incluir en la lista de excepciones al Arancel Externo Común (AEC) la correspondiente aclaración nunca había sido introducida en la “Lista de Excepciones” y, por ello, desde la entrada en vigencia del decreto 509/07 hasta el decreto 100/12, el DIE para los “DVD R”, fue del 26%, pues, más allá de la posible existencia del error, en definitiva, la mercadería había quedado englobada en la posición arancelaria (NCM) 8523.40.11, a la que le correspondía dicho porcentaje (v. fs. 176vta., tercer párrafo).

Finalmente, destacó que el decreto 509/07 tuvo por finalidad reordenar las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), razón por la cual, la inclusión en la misma posición de los “CD R” y los “DVD R” no aparece como arbitraria. Y reiteró que la fe de erratas “...que se proponía al dec. 509/2007,



y nunca se concretó, se refería a la inclusión de la llamada (30) en la Lista de excepción, para que el DIE del 26% sólo abarcara a los CD y no a la modificación de la posición arancelaria...” (v. fs. 176vta., sexto párrafo).

Impuso las costas del proceso en el orden causado.

2º) Que, contra ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso de apelación a fs. 178, que fue concedido libremente a fs. 179.

Puestos los autos en la Oficina, expresó sus agravios a fs. 182/190, que fueron contestados a fs. 192/195.

A fs. 197/199, obra el dictamen del señor Fiscal coadyuvante.

3º) Que, en su memorial de agravios, Stylus SA destaca que el decreto 509/07 incurrió en un error al fijar el mismo DIE del 26 % para los “DVD R” y los “CD R”, cuando a los primeros se les debía seguir aplicando un DIE del 16 % (v. fs. 183/183vta.). Refiere que en ningún momento cuestionó en autos que se hubiera unificado la posición arancelaria para ambos productos, sino que se quejó de que, debido a un error reconocido mediante distintos proyectos de modificación de resoluciones ministeriales, se hubiera omitido realizar una llamada –como habitualmente se efectúa en estos casos– dejando asentado que los “DVD R” se encontraban exceptuados del DIE del 26 % (fs. 183vta., cuarto párrafo).

Sostiene que esa llamada aclaratoria no se realizó debido a la excesiva demora administrativa en tramitar y dar curso a los diversos proyectos de modificación del decreto 509/07 y a que el decreto 100/12 no tuvo carácter aclaratorio y, por ende, no tuvo vigencia retroactiva (fs. 184, tercer párrafo).

Apunta que es evidente que los “DVD R” tributaron el 26 % debido a un evidente “*desliz material, de simple escritura*”, que fue reconocido por la propia demandada (v. fs. 184vta., párrafos primero y segundo). Al respecto, reseña el proyecto de decreto obrante a fs. 142/143 del expte. adm. y las previsiones del decreto 820/07; y concluye que el hecho de que el decreto 100/12 no contemplara su efecto retroactivo, no es óbice para considerar ilegítimo, arbitrario e inconstitucional el decreto 509/07 (fs. 185vta., segundo párrafo).

Por otra parte, aduce que en los considerandos del propio decreto 509/07 se especificó su finalidad: “... *reordenar las Posiciones Arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR realizando los ajustes correspondientes en nuestro ordenamiento jurídico nacional...*” y que, por lo tanto, su objeto fue realizar un reordenamiento esquemático pero de ninguna forma una modificación fundamental o esencial acerca de su contenido, con lo cual no se podía alterar el *quantum* de los derechos de importación, y menos aún, de la lista de excepciones al AEC (fs. 185vta., *in fine*, y 186, primer párrafo).

Dice, además, que su posición se reafirmó con el dictado del decreto 820/07 que, en el marco del expte. adm. S01:0226724/07 –iniciado en virtud de otro reclamo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

CAF 21.148/2014/CA1 “STYLUS SA c/ EN-DGA s/ Dirección General de Aduanas”

también por un “claro y grueso error en el decreto 509/07”– por el que se reconoció, entre otras cuestiones, que en la elaboración del Anexo XI de ese decreto se habían omitido ciertas mercancías anteriormente contempladas en el Anexo XV del decreto 690/02 y que el decreto 509/07 no pretendió introducir modificaciones en materia tributaria (v. fs. 186vta.).

Finalmente, pide la repetición de los montos indebidamente liquidados y exigidos por el Fisco Nacional, en dólares estadounidenses al tipo de cambio de la fecha anterior al pago “...tal como obligatoriamente tuvieron que ser abonados los derechos por esta parte...” (v. fs. 187, tercer párrafo, y 188/189vta.). En cuanto a la forma de pago, solicita que no se aplique la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Cencosud” del 15/5/2014, por considerarlo injusto, inequitativo y confiscatorio (fs. 188vta./189vta.).

4º) Que, ante todo conviene reseñar el marco normativo que rige el caso y las concretas circunstancias de la causa.

A partir del 1º enero de 1995, se puso en funcionamiento la Unión Aduanera entre los Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y se aprobó, asimismo, la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), que fue puesta en vigencia en nuestro país por el decreto 2275/94. A su vez, el decreto 690/02 incorporó al ordenamiento interno la resolución Grupo Mercado Común (GMC) 65/01 y efectuó diversos ajustes en la NCM, modificando parcialmente el contenido del decreto 998/95, modificatorio del decreto 2275/94. Por medio de la resolución del Grupo Mercado Común 70/06 y complementarios se aprobó el AEC basado en dicha nomenclatura, en sus versiones en español y portugués, ajustadas de acuerdo con la IV Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías.

Por otra parte, del “Sistema Armonizado de Designación y Codificación de la Mercadería” (incorporado al ordenamiento nacional por el decreto 690/02), vigente con anterioridad al dictado del decreto 509/07, surgían diferentes posiciones arancelarias en el nivel de ocho dígitos para los productos “CD R” y “DVD R” (cfr. resolución ex MEyP 676/04). Así, a los “CD R” le correspondía la posición arancelaria 8523.90.10 y a los “DVD R” la 8523.90.90.

Los primeros estaban incluidos en la “lista de excepciones al AEC”, estableciéndose a su respecto un DIE del 26 %, mientras que los “DVD R” no se encontraban en lista alguna y tributaban un DIE del 16 %.

Posteriormente, el decreto 509/07 modificó la anterior nomenclatura en relación con dichos productos, los que quedaron unificados e incorporados en la posición arancelaria 8523.40.11: “Discos para sistemas de lectura por rayos láser con posibilidad de ser grabados sólo una vez”, en la lista de excepciones al AEC con un 26 % de DIE (v. Anexo II del mencionado decreto). Es decir, que los “DVD R” pasaron a tributar un 26% de



DIE al igual que el producto “CD R”, a pesar de que anteriormente no estaban incluidos en una lista de excepciones al AEC.

En este contexto, el 5 de junio de 2007, la Cámara de Distribuidores Mayoristas de Informática (CAMDI) informó a la Secretaría de Industria, Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas que se incurrió en un error porque se estableció en “...*el Sistema Informático María para los productos mencionados en el párrafo anterior [DVD], un DIE de 26% cuando el Arancel Externo Común es de 16%, no encontrándose los DVD en lista alguna de excepción...*” (v. fs. 81/83, el subrayado no pertenece al original). Además, destacó que “...*con anterioridad a la IV enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las mercaderías...los DVD se clasificaban en la NCM por la P.A. 852390.90.100Y. Cabe destacarse que, conforme surge la Posición Arancelaria mencionada...estaba prevista para la misma un Derecho de Importación Extrazona (DIE) de 16%, porcentaje este último que coincidía exactamente con el Arancel Externo Común del 16% previsto por los estados parte para tal mercadería...*” (v. fs. 82).

En definitiva, en esa oportunidad se requirió a la División Clasificación Arancelaria de la DGA la “... *apertura a nivel SIM de una Posición específica para los DVD a los efectos de establecer para esta mercadería (tal como corresponde) un DIE del 16% que coincida con el AEC establecido, atento a que conforme a lo antes expuesto la misma no se encuentra en lista de excepción alguna que justifique la diferencia entre el DIE y el AEC previsto...*” (v. fs. 83).

En ese sentido, este error fue reconocido también en diversos proyectos de resoluciones y memorandos de órganos técnicos del Estado que recomendaron la rectificación del decreto 509/07. Así, a fs. 79/80, obra una copia de una solicitud del subsecretario de política y gestión comercial del Ministerio de Economía y Producción (expte. N° S01:0210412/07), por el que se cursó un proyecto de resolución ministerial de fe de erratas de aquel decreto para indicar que únicamente los discos compactos (CD-R), comprendidos en la posición arancelaria 8523.40.11 tributan el 26 % de DIE.

A fs. 87/88, el coordinador de la Dirección de Importaciones del Ministerio de Economía y Producción comunicó a la titular de la Dirección de Importaciones del mismo ministerio que, de oficio, se habían detectado algunos errores de orden técnico en el decreto 509/07 y que, por ello, se proponía incorporar una llamada en la Lista de Excepciones al AEC “...*para identificar que sólo los discos compactos (CD-R), comprendidos en la posición arancelaria 8523.40.11 tributan un 26% en concepto de Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) dispuesto en el decreto de marras, correspondiendo modificar en la Nomenclatura (Anexo I del Decreto N° 509/07) el nivel arancelario del Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) al 16%, aplicable al resto de los demás soportes amparados por el ítem mencionado...*” (v. fs. 87).

Asimismo, el 14 de abril de 2010, el director de política económica externa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas elaboró un memorando dirigido al





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

CAF 21.148/2014/CA1 “STYLUS SA c/ EN-DGA s/ Dirección General de Aduanas”

subsecretario de coordinación económica del mismo ministerio, mediante el cual informó que se estaba tramitando un proyecto de decreto en virtud del cual se propiciaba introducir ciertas modificaciones a los Anexos I, II, XVII-A y XVII-C del decreto 509/07. Entre ellas, puso de relieve que en el Anexo II se debía añadir esta aclaración: “...*incorporar para la posición arancelaria de la NCM 8523.40.11 la referencia (31) ‘únicamente discos compactos’ (CD-R)...*” (v. fs. 89). En ese memorando se destacó, también, que la Dirección de Legales del Área de Industria, Comercio y PYME había señalado que nada tenía que observar para la procedencia del proyecto en lo que respecta a la legalidad de su dictado “... *encontrándose facultada la titular del Poder Ejecutivo Nacional para adoptar la medida en trato...*” (v. fs. 90, primer párrafo).

Esta situación fue finalmente reconocida y modificada por el decreto 100/12, que estableció, entre otras cuestiones, que al producto “DVD R” le correspondía un 16 % de DIE (v. anexos del mencionado decreto). Esta circunstancia no se encuentra discutida por la apelante, sino que lo que en verdad pide es que se revoque la sentencia y se le restituyan los montos que abonó por demás en relación con la destinación de importación 070011C04123005F, oficializada el 2 de agosto de 2007, es decir, durante el período en que el producto había tributado erróneamente un 26 % de DIE.

A lo expuesto se debe agregar que, el 12 de agosto de 2009, este Tribunal (en su anterior integración) admitió la medida cautelar autónoma requerida por la actora y ordenó suspender los efectos del decreto 509/07 a su respecto “...*hasta tanto recaiga resolución definitiva en el expediente administrativo en el que se tramita el reclamo...*” (v. fs. 109/110vta.). Para así decidir, concluyó que, más allá de que el derecho invocado parecía *prima facie* verosímil a la luz de lo informado por las autoridades intervinientes, lo decisivo para la concesión de la medida era el peligro en la demora “... *atento a que la empresa se vería compelida a efectuar erogaciones...*” (v. fs. 110vta., segundo párrafo).

Finalmente, por resolución DI ADBA 11/2014 se rechazó el reclamo de la empresa a fin de que se le reintegrara la suma de U\$S 15.776,20 que tuvo que abonar en concepto de DIE en el marco de la destinación de importación a consumo del producto “DVD R” (v. fs. 83/84).

5º) Que, tras un atento examen de lo acontecido, se debe concluir en que asiste razón a la actora cuando afirma que el decreto 509/07 resulta ilegítimo e inconstitucional por desconocer las normas del MERCOSUR respecto del producto “DVD R”. En ese sentido, por la prueba incorporada a la causa, resulta evidente el error de unificar en una misma posición arancelaria a dos productos que tributaban diferentes DIE, sin mantener la correspondiente aclaración de que uno de ellos (los CD-R) debía abonar un DIE de 26 % por estar en una lista de excepciones, mientras que los DVD-R debían continuar



tributando un DIE de 16 %, que es el porcentaje general del AEC y no estaban incluidos en ninguna lista.

Es que, al aplicar un porcentaje distinto al que le correspondía a este último producto de acuerdo con las normas supranacionales que regían en el ámbito del mercado común, el Estado se apartó de aquello a lo cual se comprometió al suscribir los pertinentes acuerdos y normas internacionales. Y ello fue expresamente reconocido en el proyecto modificatorio del decreto 509/07 –que incorporó al ordenamiento jurídico nacional la norma comunitaria que aprobó el AEC en la NCM ajustada a la IV Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías– al afirmar la necesidad de una reforma respecto de la posición arancelaria de los “DVD R” (v. fs. 89/90).

Cabe agregar que, previo al dictado del decreto 100/12, por el que se subsanó finalmente el error en cuestión, no se efectuó ninguna aclaración al respecto. En consecuencia entre la entrada en vigencia del decreto 509/07 y el dictado del decreto 100/12 el producto “*DVD R*” tributó erróneamente un DIE que no le correspondía. Con ello no sólo se vulneraron normas de superior jerarquía, sino que también se afectó el derecho de propiedad de la actora (art. 17 de la CN).

En tales condiciones, a pesar de no caber dudas en cuanto a que dicho producto estaba incluido en una posición arancelaria errónea, no resulta razonable que se pretenda sostener que los pagos que la actora realizó en ese período fueron legítimos y ajustados a derecho; máxime cuando, como se probó en autos, el aludido error fue admitido por órganos técnicos del Estado Nacional en proyectos de modificación de decreto, dictámenes y memorandos (v. fs. 79/80, 87/88 y 89/90), ya sea tanto en respuesta a la petición de la Cámara de Distribuidores Mayoristas de Informática (fs. 81/83) como de oficio (fs. 87/88).

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de apelación de la actora, revocar la sentencia de fs. 174/177 y admitir la demanda de fs. 2/14.

6º) Que, en consecuencia, procede declarar la inconstitucionalidad del decreto 509/07, en lo que fue materia de discusión y en cuanto afecta a la destinación de importación involucrada en autos (DI 070011C04123005F), así como la nulidad de la resolución DI ABDA 11/14, que se sustenta en aquel decreto y denegó el pedido de repetición, con la correspondiente orden de reintegrar a la actora las sumas indebidamente abonadas en concepto de DIE.

Ahora bien, con relación a la fecha del tipo de cambio que se debe tomar para calcular la devolución y la tasa de interés a aplicar (temas introducidos tanto en la demanda como en el alegato de fs. 158/166 y mantenidos en el memorial), cabe proceder del siguiente modo.

Por aplicación del deber que pesa sobre los tribunales de justicia de tener en cuenta la jurisprudencia del máximo órgano judicial de la República (doctrina de Fallos: 321:3201; 324:3764; 329:4931; 330:4040, entre otros), en cuanto al primero de estos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

CAF 21.148/2014/CA1 “STYLUS SA c/ EN-DGA s/ Dirección General de Aduanas”

temas, corresponde estar a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa C.1242.XLIX.REX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sent. del 15/4/14, criterio ratificado en CAF 16534/13/CS1 “Abbot Laboratories Argentina SA (TF 31514-A) c/ DGA” sent. del 15/3/16 (v. en igual sentido, esta Sala causas 39315/11 “SA Hispano Argentina Curtiembres y Charol (TF 27773-A) c/ DGA”, sent. del 15/12/15 y 49628/18 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA c/ DGA s/ Recurso Directo Organismo Interno”, sent. 26/3/19).

7º) Que, con relación al otro tema, cabe recordar que rige un sistema particular previsto en resoluciones del Ministerio de Economía por las que se establece la tasa de interés a emplear en cada momento (conf. arts. 794, 811 y 812 del Código Aduanero).

En lo que aquí interesa, la resolución 314/04, emitida por el entonces Ministerio de Economía y Producción, fijó la tasa de interés para los supuestos del art. 811 del CA –devolución de importes pagados indebidamente en concepto de tributos- en cincuenta centésimos por ciento (0,50%) mensual (art. 3º), mientras que estableció en el dos por ciento (2%) mensual la tasa prevista en el art. 794 del mismo cuerpo legal para la mora de los particulares en el pago de tributos aduaneros (art. 1º).

Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas elevó la tasa prevista por el art. 1º de la resolución 314/04 al tres por ciento (3%) mensual; manteniendo la tasa aplicable a los casos de repetición en cincuenta centésimos por ciento (0,50%) mensual (art. 1º de la resolución 841/10)

Más cercano en el tiempo, el Ministerio de Hacienda dictó la resolución 50/19 (B.O. 08/02/19), en virtud de la cual aumentó nuevamente la tasa de interés resarcitorio del art. 794 del CA, y mantuvo la tasa prevista por el art. 3º de la resolución 314/14.

Puntualmente, estableció que la tasa de interés resarcitoria mensual prevista por los arts. 794, 845 y 924 del CA, vigente en cada trimestre calendario, “... *será la efectiva mensual equivalente a uno coma dos (1,2) veces la tasa nominal anual canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a ciento ochenta (180) días del Banco de la Nación Argentina vigente el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre*”. Por lo demás, el art. 5º de la resolución 50/19 estableció que dicha norma entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación el Boletín Oficial y surtirá efectos desde el 1º de abril de 2019.

A ello agregó que “*desde su entrada en vigencia y hasta el 31 de marzo de 2019, las tasas de interés previstas en los artículos 1º y 2º de la resolución 314/2004 del ex Ministerio de Economía y Producción, serán del cuatro coma cinco por ciento (4,5%) y cinco coma seis por ciento (5,6%) mensual, respectivamente*”.





Según los considerandos de la nueva normativa, el tiempo transcurrido desde la última modificación hizo necesario “*adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, a fin de estimular la cancelación en término de las obligaciones y evitar que los contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de los impuestos*”.

En este contexto, al resolver sobre la tasa que se debía aplicar en un supuesto de repetición, el Tribunal señaló que no se advertía cuál era el motivo para valorar de un modo tan dispar el impacto de las condiciones económicas actuales sobre las obligaciones dinerarias que sólo se diferencian por el sujeto deudor, esto es, el Fisco Nacional o los contribuyentes (conf. esta Sala, causa 68476/18 “*Maselis, Analía Edith c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo*”, sent. del 12/3/19 y sus citas).

Si bien en el precedente citado se examinó la disparidad en la actualización de las tasas de interés previstas en el régimen de la ley 11.683, sus conclusiones se extendieron a casos de repetición de tributos aduaneros, pues como se desprende las normas *supra* referenciadas, la irrazonable distinción en detrimento del patrimonio de los particulares se proyectó en igual medida a la materia tributaria aduanera (cfr. causa “*Oleaginosa Moreno Hermanos SA*”, cit.).

Así, en concordancia con la posición de todas las otras salas que componen esta Cámara en los precedentes que allí se citan, y en función del principio de seguridad jurídica, el Tribunal consideró justificado y razonable apartarse del criterio que mantenía hasta ese momento y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 3º y 4º de la resolución 314/04 y ordenó la aplicación de la tasa pasiva publicada por el BCRA a la devolución de las sumas reconocidas (v. causas “*Maselis*” y “*Oleaginosa Moreno Hermanos SA*” citadas).

8º) Que, sin perjuicio de ello, es necesario destacar que, con posterioridad a los precedentes citados, se han dictado nuevas normas vinculadas con este punto, razón por la que en el *sub examine* se debe atender también a las modificaciones introducidas por estos preceptos, en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (doctrina de Fallos: 338:706; 341:266; entre otros).

En efecto, por resolución 598/19 (B.O. 18/7/19), el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo que expuso como fundamento para su dictado, entendió necesario modificar las tasas de interés aplicables a los casos en los que asiste a los contribuyentes el derecho a percibir sumas por parte del organismo recaudador y tomar como referencia la tasa pasiva promedio que publica el BCRA. En consonancia con ello, dispuso que “... *la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley, y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero, vigente en cada trimestre*”







Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

CAF 21.148/2014/CA1 “STYLUS SA c/ EN-DGA s/ Dirección General de Aduanas”

*calendario, será la efectiva mensual surgida de considerar la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para el período de treinta (30) días finalizado el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre. Cuando se trate de conceptos expresados en dólares estadounidenses, la tasa de interés aplicable será del cero coma veinte por ciento (0,20%) mensual” (art. 4º).*

Asimismo, establece que para la cancelación de las obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado antes de la fecha de entrada en vigencia de esa resolución, se deberán aplicar los regímenes vigentes durante cada uno de los períodos que éstos alcancen (art. 8º) y que el nuevo régimen entraría en vigencia al día siguiente de su publicación y surtiría efectos desde el 1º de agosto de 2019 (art. 10).

Por último, por medio del art. 9º de la resolución 598/19 se derogó la resolución 314/04.

En tales condiciones, corresponde disponer que la devolución de la suma reconocida en autos se efectúe teniendo en cuenta la doctrina sentada en el precedente “Cencosud” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con más los intereses calculados según la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA y la resolución 598/19, desde su entrada en vigencia, todo ello hasta su efectivo pago.

9º) Que, toda vez que se propone al acuerdo revocar la sentencia de primera instancia y admitir la demanda, es necesario adecuar las costas del pleito y dado que no se advierten circunstancias excepcionales que justifiquen apartarse del principio general de la derrota, corresponde que la demandada vencida se haga cargo de ellas en ambas instancias (conf. arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).

Por ello, me pronuncio y voto por hacer lugar al recurso de apelación de la actora y revocar la sentencia de fs. 174/177. En consecuencia, corresponde admitir la demanda de fs. 2/14, declarar la inconstitucionalidad del decreto 509/07, en lo que fue materia de discusión y en cuanto afecta a la destinación de importación involucrada en autos (DI 070011C04123005F), y de la resolución DI ABDA 11/14 y ordenar que se reintegre a Stylus SA la suma pretendida, de conformidad con los términos de los considerandos 6º, 7º y 8º. Con costas en ambas instancias a la vencida (arts. 68 y 279 del CPCCN).

Los señores jueces de Cámara Jorge Eduardo Morán y Marcelo Daniel Duffy adhirieron al voto precedente.

Conforme el resultado que informa el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación de la actora y dejar sin efecto la sentencia de fs. 174/177. En consecuencia, se admite la demanda de fs. 2/14 y se declara la inconstitucionalidad del decreto 509/07, en lo que fue materia de discusión y en cuanto afecta a la destinación de importación involucrada en autos (DI 070011C04123005F), y de



la resolución DI ABDA 11/14 y se ordena que se reintegre a Stylus SA la suma pretendida, de conformidad con los términos de los considerandos 6º, 7º y 8º del voto del vocal preopinante. Con costas en ambas instancias a la vencida (arts. 68 y 279 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese –al señor Fiscal General en su público despacho– y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI

